Santiago de Cali, 27 de junio de 2025

DOCTOR:

JULIÁN ANDRÉS VELASCO ALBÁN

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

RADICACIÓN: 76001 33 33 006 2023 00012 00

DEMANDANTES: GLADYS PEÑA Y OTROS

DEMANDADOS: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ VILLARREAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1.144.098.393, titular de la Tarjeta Profesional núm. 406.047 del C.S.J, abogado en ejercicio, actuando en calidad de apoderado de la parte demandante, estando dentro del término, procedo a presentar **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**, de la siguiente manera:

Respetado Juez, solicito que se acceda a las pretensiones de la demanda, toda vez que se encuentra acreditado lo siguiente:

1.- El daño: Con la copia del registro de defunción del señor ALBERTO PAVA ANGARITA

2.- La falla en el servicio: Se encuentra acreditado, según lo respondido por la Policía Nacional, quienes certificaron que el señor PAVA ANGARITA, se encontraba recluido en una celda para 150 personas, pero la misma tenía más de 300 reclusos. Igualmente se tienen acreditados los protocolos que debían asumir las entidades públicas que custodiaran reclusos, en la época de covid, los cuales fueron desatendidos por la Policía Nacional.

No se puede olvidar que de acuerdo con la historia clínica del señor PAVA ANGARARITA, este requería un aislamiento especial.

3.- Finalmente también se acreditó el nexo de causalidad, toda vez que el INSTITUO NACIONAL DE SALUD, EN EL ÍNDICE SAMAI No 85 PDF 134-MemorialWeb_otro (ÚLTIMO PDF ADJUNTO) conceptuó que el hacinamiento en una cárcel implicaba alto riesgo de contacto por covid 19, y finalmente se acreditó que el demandante falleció por dicho virus.

Documentos adjuntos

RUTA	FECHA_HORA	ACCIONES
C:\inetpub\wwwroot\pq\App_Data\638700305572036003CORREO.pdf	17/12/2024 11:09:24	Descargar
C:\inetpub\wwwroot\pq\App_Data\6387003056220360005SOLICITUD.pdf	17/12/2024 11:09:24	Descargar
C:\inetpub\wwwroot\pq\App_Data\6387088523779493204334-Respuesta_PQRS_2024-3238-.pdf	27/12/2024 8:33:57	Descargar
C:\inetpub\wwwroot\pq\App_Data\638708852461074335Respuesta PQRS 2024-3238.pdf	27/12/2024 8:34:06	Descargar

Siendo así, y al estar reunidos los 3 elementos de responsabilidad, se debe declarar la responsabilidad de las entidades demandadas en el sub lite y ordenar la indemnización de los perjuicios causados a los demandantes.

El Artículo 2 de la Constitución Política de 1991, señala que:

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado”.

El artículo 28 de la Constitución Política de 1991 indica:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”

El artículo 29, en su inciso 4 de la Constitución Política de 1991 señala:

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”

El Art. 90 de la Constitución Política de 1991 dice:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”

La Ley 65 de 1993 dispone:

“Artículo 3A. Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, religión, identidad de género, orientación sexual, raza, etnia, situación de discapacidad y cualquiera otra. Por tal razón, las medidas penitenciarias contenidas en la presente ley, contarán con dicho enfoque”.

“Artículo 5°. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.

Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto.

Lo carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

“Artículo 8°. Legalización de la captura y de la detención. Nadie podrá permanecer privado de la libertad en un establecimiento de reclusión señalado por la ley sin que se legalice su captura o su detención preventiva, en los términos previstos en el Código de Procedimiento penal.

Respecto de la persona aprehendida, el Director del establecimiento carcelario, deberá verificar la existencia de mandamiento escrito de la autoridad judicial que ordene mantenerla privada de la libertad con las formalidades legales, la indicación de los motivos de la captura y de la fecha en que esta se hubiere producido. Asimismo, procederá a ordenar su registro en los términos señalados en el Reglamento General”.

“Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.

El sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas que lo adicionen y complementen”.

“Artículo 16. Establecimientos de reclusión nacionales. Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y

vigilados por el Inpec. El Inpec, en coordinación con la Uspec, determinará los lugares donde funcionarán dichos establecimientos.

Cuando se requiera hacer traslado de condenados el Director del Inpec queda facultado para hacerlo dando previo aviso a las autoridades competentes.

Se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignar los recursos suficientes a la Uspec para la creación, organización y mantenimiento de los establecimientos de reclusión. Parágrafo 1°. Todos los nuevos centros de reclusión contarán con un perímetro de aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo urbano.

Parágrafo 2°. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario digno”.

“ARTICULO 17. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Corresponde a los

departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.

Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos.

Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios. Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.

La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la

infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario”.

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

Sobre el tema de la posición de garante que tiene el Estado respecto de los privados de la libertad, el Consejo de Estado en sentencia del 27 de abril de 2006 precisó lo siguiente:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizados plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan. “En esa situación se encuentran los derechos a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de la libertad, dado que su seguridad depende por completo de la administración y ésta debe garantizarla. En efecto, la llamada por la doctrina obligación de seguridad, se concreta en el deber que tienen las autoridades de evitar que las personas detenidas o presas sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan en tal condición o, dicho de otra forma, el Estado tiene el deber de preservarlas de los daños que con ocasión de su situación pueda ocurrirles. La misma obligación comprende la de “custodia y vigilancia” pues se busca la garantía de la seguridad personal del detenido. Las autoridades estatales tienen a cargo el deber de tomar las medidas necesarias para evitar cualquier atentado contra la vida o integridad personal de los detenidos o presos. “En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquél es imputable al Estado, salvo en los casos en que éste haya ocurrido por una causa extraña, cuya demostración corresponderá a la parte demandada”

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el señor ALBERTO PAVA ANGARITA estaba bajo la responsabilidad, cuidado y guarda de los acá demandados estos no realizaron ninguna labor preventiva para evitar el contagio del COVID-19 conociendo su comorbilidad de la obesidad mórbida, ocasionando que este muriera

debido a tal negligencia, se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

Atentamente,

Andrés Álvarez
ANDRÉS FELIPE ALVAREZ VILLARREAL
C.C No. 1.144.098.393
T.P. No 406.047 del C.S.J